

RESUMEN DE LA PONENCIA QUE PRESENTA YURI BELTRÁN EN EL MARCO DE LA MESA “IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO A NIVEL SUBNACIONAL: PROBLEMAS, ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y PROPUESTAS DE REFORMAS II” EN EL CONGRESO DE LA SOMEE 2026

Problemas en la implementación de la Ley de Violencia Política en razón de Género. Evidencia desde Quintana Roo

La violencia política en razón de género (VPRG) constituye uno de los obstáculos más persistentes para la participación política de las mujeres en México. La reforma de 2020 a la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia supuso un avance normativo relevante, aunque la distancia entre el diseño legal y su implementación efectiva sigue siendo significativa en la mayoría de las entidades federativas.

Esta ponencia presenta los resultados preliminares de un estudio de caso sobre Quintana Roo, desarrollado en el marco del proyecto colectivo sobre implementación subnacional de la ley de VPRG en México. El análisis se organiza en torno a tres dimensiones analíticas: el marco normativo estatal y su coherencia con la legislación federal; la capacidad institucional del OPLE y del Tribunal Electoral local para atender y resolver casos; y el funcionamiento de la cadena sancionatoria, con atención particular a los estándares probatorios, la gradualidad de las sanciones y la coordinación entre instancias.

La investigación combina tres estrategias metodológicas. Se realiza análisis documental de la legislación estatal, los acuerdos del OPLE y las resoluciones del órgano jurisdiccional local. Se construye una base de datos de casos a partir de fuentes institucionales para identificar patrones cuantitativos de activación y resolución. Se llevan a cabo entrevistas semiestructuradas con funcionarias y funcionarios de las autoridades electorales y jurisdiccionales de la entidad. Los hallazgos se discutirán en relación con las hipótesis del proyecto colectivo, con énfasis en los factores institucionales que explican las brechas de implementación observadas en Quintana Roo.